



Gerencia General



Trabajando con la fuerza del pueblo!

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 010 - 2013 – GR-JUNÍN/GGR

Huancayo, 20 FEB. 2013

### EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

El Informe Legal No 698-2012-GRJ/ORAJ, de fecha 07 de agosto del 2012, el Reporte N° 074-2012-GRJUNIN-ORAF, de fecha 12 de julio de 2012, el cual contiene el recurso impugnatorio de apelación contra la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN, de fecha 08 de junio de 2012, interpuesto por el administrado **Isaías Germán Paucar Ambrosio**;

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme fluye de los actuados mediante solicitud de fecha 16 de mayo de 2012 el impugnante pensionista del Gobierno Regional Junín (Sector Trabajo y Promoción del Empleo), con nivel remunerativo STB, solicita pago de bonificación del D.S. N° 051-91-PCM, D.U. N° 037-94; D.U. N° 090-96; D.U. N° 011-99 y D.U. N° 073-97, argumentando que se ha ordenado el pago por dichos conceptos a otros pensionistas de la región y en mérito al derecho fundamental a la igualdad consagrado en la Constitución Política del Perú.

Que, mediante Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF de fecha 08 de junio de 2012 el Director Regional de Administración y Finanzas, da respuesta a la petición del impugnante y le comunica que su cese se produce el 24 de mayo del año 1994, por renuncia voluntaria, por lo que en virtud del artículo 5° del Decreto Ley 20530 se le otorga la pensión de cesantía nivelable por contar con 20 años 02 meses y 21 días de servicios al Estado, entonces al otorgarle la pensión de cesantía se tomó en cuenta sus 20 años 02 meses y 21 días de servicios reales y remunerados, la misma que hizo que adquiriera el derecho a la pensión en avas partes de los conceptos remunerativos que percibió como personal activo del nivel remunerativo STB y demás incrementos que posteriormente se diera mediante una norma expresa. En tal sentido de conformidad al art. 2 del D.U. 037-94, se le viene otorgando desde el mes de julio del año 1994 la bonificación especial proporcionalmente al tiempo de servicios prestado y al nivel remunerativo; posteriormente se procedió de igual forma con los demás incrementos de los Decretos de Urgencia, tal como se advierte en su boleta de pago del mes de mayo 2012.

Que, finalmente se le comunica que previa verificación de la Planilla de Pago del mes de setiembre del año 1994 hasta el mes de mayo del presente año se constató que a la fecha se le viene otorgando el 30% de la bonificación especial, por el monto de S/. 6.47 nuevos soles de conformidad a lo dispuesto por

D: 262471

E: 182366



Gerencia General



el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91.

Que, con fecha 22 de junio de 2012, Exp. N° 46431, se advierte que el impugnante en la sumilla de su escrito presenta **recurso de apelación**, sin embargo, en su petitorio presenta **recurso de reconsideración**, así menciona:

*"Que, haciendo uso de mi derecho de acción y contradicción, recurro a su despacho con el fin de interponer **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA CARTA N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF** de fecha 08 de junio de 2012, para que se **reconsidere** el extremo de la carta en que menciona que se está pagando correctamente, hecho que no se ajusta a Ley, y existe una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho fundamentado su pedido en los siguientes fundamentos".*

Que, sin embargo, en el Primer fundamento de Hecho de su escrito cuestiona una carta que no existe en el expediente, "Carta N° 287-2009-GRJ-GGR", del año 2009, así su fundamento es como ad Litteram transcribo:

*"En Primer lugar la **Carta N° 287-2009-GRJ-GGR** no tiene una motivación adecuada, por el mismo hecho de que se trata de una carta y no de una resolución que obliga a fundamentar de manera más adecuada la decisión de la administración ante un pedido o solicitud de parte de los administrados, por lo que se impugna dicho acto administrativo por ese motivo, **FALTA DE MOTIVACIÓN**".*



Que, mediante Reporte N° 074-2012-GRJUNIN-ORAF de fecha 12 de Julio de 2012 el Director Regional de Administración y Finanzas eleva al Gerente General Regional el recurso de apelación del impugnante conforme lo dispone el artículo 209° de la Ley N° 27444.



Que, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado, y habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde efectuar el análisis del recurso de apelación ahora propuesto por el impugnante.

Que, el recurso de apelación es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo parecer jurídico de la administración sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho.

Que, la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF le fue notificada al impugnante el 15 de junio de 2012 y el recurso de apelación ha sido presentado el 22 de junio de 2012, en consecuencia, se encuentra dentro del plazo establecido en el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 "El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días".

Que, el numeral 1.2) del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 reconoce a los administrados el goce de todos



Gerencia General



los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Que, el artículo 6° de la acotada Ley establece la motivación del acto administrativo en los siguientes términos:

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Que, el jurista Juan Carlos Morón Urbina, en su libro "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General", Pág. 159, en relación a la motivación del acto administrativo comenta: *"Al efecto, debe tenerse en cuenta que la motivación administrativa puede alcanzarse mediante la forma explícita de consignar íntegramente la expresión argumental de los hechos y el derecho en la resolución, de modo suficiente, en los comúnmente denominados "considerandos" (motivación contextual).*

*Adicionalmente el artículo 6.2. permite que se pueda motivar mediante la aceptación íntegra de los pareceres o dictámenes previos existentes en el expediente, en cuyo caso será necesario solo la cita expresa del documento que le sirve de sustento y de su ubicación dentro del expediente para la accesibilidad del administrado (motivación in aliunde).*

*En el caso de esta última modalidad tenemos que precisar que subsiste la necesidad de justificar tanto lo fáctico como lo jurídico del acto, por lo que si los informes se refieren solo a uno de estos extremos, la autoridad deberá complementarlos en forma debida. Del mismo modo, a efectos del procedimiento, los informes citados como antecedentes justificativos, se entienden integrantes del acto mismo, y la autoridad, asume la responsabilidad por ellos también. (...). La motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado, y permitir al revisor, llegado el caso, apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento. Por ello es necesario, evitar el empleo como motivación de citas legales abiertas, que solo hacen referencias a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad, y menos de qué manera este precepto se aplica al caso concreto"*

**Que, la motivación de los actos administrativos según el Tribunal Constitucional.**

EXP. N.° 04200-2011-PA/TC-HUAURA-ALEJANDRO SOTA MEDRANO

4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, considerando que:

*"[...]El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. [...]"*

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos





Gerencia General



administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.º 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo." (STC 00091-2005-PA/TC, F.J. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras).

5. Por tanto, la motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce que *Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (...).*

Que, en relación al derecho de petición, es necesario resaltar los fundamentos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N.º 01420-2009-PA/TC; Marco Antonio García Vera;

2. El artículo 2º, inciso 20) de la Constitución Política, establece como derecho de toda persona aquel referido "A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad".

5. Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2º de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. Asimismo, la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la petición y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado o interesados.

6. Sobre la materia debe insistirse en que es preciso que la contestación oficial sea motivada; por ende, no es admisible jurídicamente la mera puesta en conocimiento al peticionante de la decisión adoptada por el funcionario público correspondiente.

7. En consecuencia, la acción oficial de no contestar una petición o hacerlo inmotivadamente trae como consecuencia su invalidez por violación, por omisión de un deber jurídico claro e inexcusable.

8. Si bien el derecho de petición implica que la autoridad competente debe dar respuesta por escrito a una petición formulada también por escrito, no debe confundirse el contenido del pronunciamiento de la autoridad con la notificación al peticionante de las acciones desarrolladas por aquella en atención a lo solicitado, pues el contenido del pronunciamiento –a expresarse por medio de la forma jurídica administrativa adecuada– se refiere a la decisión de la Administración que favorece







Gerencia General



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

o no lo peticionado; y la notificación se refiere más bien a una formalidad ineludible para la autoridad, utilizada para poner en conocimiento del peticionante el resultado de su petición.

9. Esta obligación de la autoridad competente de dar al interesado una respuesta también por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho de petición mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos:

- a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición;
- b) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición;
- c) dar el curso correspondiente a la petición;
- d) resolver la petición, motivándola de modo congruente con lo peticionado, y
- e) comunicar al peticionante lo resuelto.

Que, en el presente caso, se ha dado respuesta a la petición del impugnante mediante la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF de fecha 08 de junio de 2012, lo cual resulta contrario a lo establecido en la Directiva Gerencial N° 005-2011-GRJ-GGR/ORDITI de fecha 27 de Octubre de 2011 "NORMAS GENERALES PARA LAS COMUNICACIONES ESCRITAS Y MENSAJES ELECTRÓNICOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" que prescribe: La comunicación externa es la transmisión y recepción de datos del Gobierno Regional Junín, hacia otras entidades como: Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e instituciones del Sector Privado, utilizándose para ello el **Oficio y la Carta**, señalándose:

**Oficio:** "Es la comunicación escrita que generándose en cualquier dependencia de la entidad se dirige a un destinatario de mayor, similar o menor jerarquía"

**Carta:** "Es un documento que sirve para establecer una comunicación principalmente con una institución privada".

Que, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, la validez de un acto administrativo se encuentra sujeta a que éste haya sido emitido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez: competencia; objeto o contenido lícito, preciso, posibilidad física y jurídica, finalidad pública, debida motivación y procedimiento regular; habiéndose establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido, en tanto no sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme se encuentra establecido en el artículo 9° de la misma Ley.

Que, conforme a la disposición del artículo 10° de la ley comentada *supra* son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes. 1).- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2).- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez (...); asimismo, conforme a las disposiciones de los artículos 11°, 202°, y 207°, la nulidad de un acto administrativo puede ser declarada a pedido de parte a través de la interposición de las correspondientes recursos administrativos que correspondan (Reconsideración; apelación o revisión) o de oficio por el





Gerencia General



funcionario jerárquico superior al que emitió el acto que se invalida, cuando adolezca de alguno de los requisitos de validez.

Que, la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF de fecha 08 de junio de 2012, que ahora es apelada, no se encuentra debidamente motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, como es de observarse existe la exposición de fórmulas generales no resultando específicamente esclarecedoras, es decir, no existe un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, sin existir la argumentación o análisis que le ha servido al Director Regional de Administración y Finanzas declarar la improcedencia de la petición; además de la revisión del expediente, en ella no se encuentra ningún informe y/o dictamen que permita al revisor, apreciar la certeza jurídica mediante el cual el Director Regional de Administración y Finanzas ha decidido el procedimiento; a ello debemos agregar que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, al resolverse peticiones que expresen limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio, **han de estar debidamente sustentadas, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.** En tal sentido, corresponde declarar la nulidad de oficio de la mencionada Carta, resultando contrario a lo dispuesto a la Directiva Gerencial N° 005-2011-GRJ-GGR/ORDITI de fecha 27 de Octubre de 2011 "NORMAS GENERALES PARA LAS COMUNICACIONES ESCRITAS Y MENSAJES ELECTRÓNICOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, por cuanto, el empleo de la **Carta** es para establecer una comunicación principalmente con una institución privada.

Que, además, debe declararse la nulidad de la Carta señalada precedentemente, por no estar debidamente motivada, lo cual contraviene lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 3° y numeral 6.1) del artículo 6° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, causal de nulidad conforme se encuentra dispuesto en el numeral 2) del artículo 10° de la Ley acotada.

Que, finalmente, este despacho estima que habiéndose declarado la nulidad de Oficio de la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF de fecha 08 de junio de 2012, deviene en innecesario pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación planteado por el impugnante.

Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°427-2011-GR-JUNÍN/PR, de fecha 20 de junio de 2011 y contando con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica:

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO** de la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF, de fecha 08 de junio de 2012 mediante el cual el Director Regional de Administración y Finanzas Junín ha dado respuesta al



Gerencia General



*Trabajando con la fuerza del pueblo!*

administrado **Isaías German Paucar Ambrosio** a su petición de pago de bonificaciones del D.S. N° 051-91; D.U. N° 037-94, D.U. N° 090-96; D.U. N° 073-97 y D.U. N° 011-99.

**ARTICULO SEGUNDO.- RETROTRAER** el procedimiento hasta el momento que el Director Regional de Administración y Finanzas Junín se pronuncie en relación a la solicitud de fecha 16 de mayo de 2012 presentado por el administrado **Isaías German Paucar Ambrosio** que solicita pago de bonificación del D.S. N° 051-91-PCM, D.U. N° 037-94; D.U. N° 090-96; D.U. N° 011-99 y D.U. N° 073-97; **cabe precisar que este pronunciamiento no contiene una obligación en el sentido que la Entidad está en la obligación de conceder lo solicitado.** En todo caso, corresponde a la Entidad, determinar si lo solicitado corresponde ser otorgado, o no; por cierto, la obligación de dar respuesta también contiene la de que ésta debe estar debidamente motivada.

**ARTÍCULO TERCERO.- INOFICIOSO** pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación planteado por el administrado **Isaías German Paucar Ambrosio**, por haberse declarado la nulidad de oficio de la Carta N° 119-2012-GR-JUNIN-ORAF, de fecha 08 de junio de 2012.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR** copia de la presente resolución al interesado, Dirección Regional de Administración y Finanzas, y demás órganos competentes del Gobierno Regional de Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**HENRY LÓPEZ CANTORÍN**  
GERENTE GENERAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN